

ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA PARIDAD ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.

REACHES AND CHALLENGES OF ELECTORAL PARITY DURING THE FEDERAL ELECTORAL PROCESS 2017-2018.

FLOR ANGELI VIEYRA VÁZQUEZ¹

RESUMEN

La Reforma Constitucional en Materia Político Electoral publicada mediante Decreto el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación trajo consigo nuevas leyes electorales. En esta investigación se abordará uno de los derechos constitucionales que incorporó dicha reforma político electoral: la paridad electoral, cuyo fundamento se encuentra en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su implementación provocó un impacto tanto en el sistema electoral como en el sistema político debido al cambio en el reparto del poder político. Con base en International IDEA 2015, señaló que de 54 países que actualmente cuentan con leyes de cuotas y/o paridad, México alcanzó el cuarto lugar.

Como resultado de las elecciones de 2015, 2016 y 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 8 de noviembre de 2017 el Acuerdo INE/CG508/2017 cuya finalidad consistió en establecer medidas para la transversalización real de la paridad de género durante el proceso electoral federal 2017-2018, evitando las diversas prácticas implementadas por los partidos políticos en los procesos antes señalados para favorecer a los hombres sin vulnerar la ley. Por lo anterior, la presente investigación analizará los efectos cuantitativos de la paridad electoral en el ámbito Federal, así como el cumplimiento del acuerdo del INE con la finalidad de identificar sus alcances y desafíos.

PALABRAS CLAVE: Paridad electoral, democracia constitucional, sistema electoral, y género.

¹ Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Profesora e investigadora. Consejera Distrital del 38 Consejo Distrital del INE en el Estado de México. Correo Electrónico: angeli_vieyra@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Como resultado de la Reforma Constitucional en Materia Político Electoral de 2014, la paridad electoral se convirtió en un nuevo punto de partida para continuar la exigencia de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en la garantía de sus derechos humanos, inherentes a una cultura democrática, pues su obligatoriedad constitucional es resultado de una larga lucha política de los movimientos feministas en búsqueda de sus derechos políticos, cuyos antecedentes se ubican en las cuotas de género. Dicha reforma publicada mediante Decreto el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación trajo consigo nuevas leyes electorales que obligaron a la armonización de leyes en cada una de las Entidades Federativas.

La paridad electoral provocó un impacto tanto en el sistema electoral como en el sistema político debido al cambio en el reparto del poder político, mostrando que es posible transformar la forma de concebir la representación política incidiendo en la modificación de las estructuras de género en el espacio político, sin embargo, las primeras experiencias de su implementación también mostraron que es necesaria una vigilancia constante en el cumplimiento de la norma, tanto en el sistema electoral, dependiendo del principio de elección: mayoría relativa y representación proporcional, así como en el sistema de partidos que se rehúsa a dejar atrás la persistente cultura política androcrática, pues son justamente los partidos políticos los responsables del acceso a las candidaturas.

Las elecciones intermedias realizadas el 7 de junio de 2015 fueron el primer escenario donde se pusieron de manifiesto los alcances benéficos de dicha reforma, pero también de sus desafíos. Como resultado de estas elecciones, así como las de 2016 y 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 8 de noviembre de 2017 el Acuerdo INE/CG508/2017 cuya finalidad consistió en establecer medidas para la transversalización real de la paridad de género durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, evitando las diversas prácticas implementadas por los partidos políticos en los procesos antes señalados que favorecieron a los hombres sin vulnerar la ley.

Ante esta apariencia de conductas democráticas por parte de los partidos políticos, es necesaria una vigilancia constante, exhaustiva y sancionable para obligarlos a cumplir con la paridad. El escenario posterior al primero del julio ha sido un campo fértil de análisis para discutir y corregir los límites y desafíos que enfrente la paridad electoral.

Con base en lo anterior, las preguntas de esta investigación son las siguientes: ¿Cuál es el vínculo entre la democracia constitucional mexicana y la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres? ¿Cómo incidió cuantitativamente el Acuerdo INE/CG508/2017 respecto a la paridad electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018? ¿Cómo influye el sistema electoral mexicano en la asignación de lugares para mujeres por los principios de mayoría relativa y representación proporcional a partir de las reglas de paridad electoral establecidas en el Acuerdo INE/CG508/2017?

Sin duda, transitar de una de una democracia aparente² a una más consolidada, requiere de la presencia y participación de las mujeres en el espacio de la política, ahora, no sólo para acceder al cargo sino también para ejercer el poder político de forma paritaria.

² Utilizó el término de democracia aparente de Michelangelo Bovero quien lo utiliza para hacer referencia a aquellas democracias donde el juego político se desarrolla o parece desarrollarse según las reglas democráticas, pero adolece de alguno de sus elementos prescriptivos para su correcto funcionamiento. Véase: Pedro Salazar. 2013. *La democracia constitucional. Una radiografía teórica*, México: FCE-III-UNAM,

1.- *Democracia Constitucional: Uno de los caminos para exigir los derechos político-electorales de las mujeres en México.*

La propuesta de democracia constitucional que retomo de Pedro Salazar Ugarte tiene como fundamentos teóricos la triangulación de tres corrientes del pensamiento político moderno: el contractualismo, el constitucionalismo y la democracia, todas enmarcadas en el pensamiento filosófico occidental cuyas connotaciones androcéntricas han sido susceptibles a la deconstrucción en beneficio de las mujeres. El esfuerzo por unir el constitucionalismo y la democracia es una muestra de que es posible superar ciertas dicotomías imperantes en el pensamiento político moderno. Al integrar mi postura como feminista mostraré las complejidades en las corrientes del pensamiento político moderno, con la intención de plantear alternativas reales a las problemáticas actuales que puedan cruzar los límites de las barreras epistemológicas.

Pedro Salazar menciona que la democracia constitucional reaparece como una alternativa frente al desolador escenario que dejó la Segunda Guerra Mundial, en consecuencia, Alemania e Italia fueron los primeros países en introducir ese modelo de organización jurídico-político, seguidos de Portugal y de España. La democracia constitucional se convirtió en el marco de referencia para los documentos internacionales que aspiraban a una paz mundial, como: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos del Hombre (Salazar, 2013: 46).

Desde el siglo XVII ya existían documentos que demandaban la igualdad política entre hombres y mujeres, en el siglo XVIII, la contundente *Declaración de los Derechos de la mujer y la ciudadana*³ de Olympe de Gouges, escrita en 1789, marcó un hito en los documentos internacionales que de facto y nominalmente sólo consideraban a los hombres como ciudadanos. De Gouges, logra evidenciar la exclusión de las mujeres tanto de su condición humana como ciudadana, esta última (hasta nuestros días y según cada contexto) sigue todavía desigual respecto a los hombres. En el mismo siglo XVIII, Mary Wollstonecraft en 1792 escribió *Vindicación de los derechos de la mujer*,⁴ su objetivo era ubicar a la educación

³ Véase: José Sazbón (2007), *Cuatro mujeres en la Revolución Francesa*, Buenos Aires: Biblos.

⁴ Véase: Mary Wollstonecraft (2013), *Vindicación de los derechos de la mujer*, México: Taurus.

como una de las principales causales que explica la subordinación y desigualdad de las mujeres con respecto de los hombres en el ejercicio de la ciudadanía.

Como puede apreciarse, la lucha por los derechos de las mujeres (sean estos de libertad, políticos o sociales) no son recientes: el impulso de muchas mujeres y algunos hombres poco a poco ha logrado obtenerlos por medio de la lucha política, fundamentada en los múltiples movimientos feministas. La realidad es sumamente compleja y por desgracia los derechos fundamentales se encuentran constantemente amenazados, en consecuencia, son necesarias su exigencia, su garantía y su vigilancia, también de forma constante.

Al emplear el concepto de democracia constitucional como uno de los ejes teóricos más importantes de la presente investigación, es necesario reconocer que su precedente se halla en el feminismo liberal, un feminismo criticado -no sin razones-: *a)* por su origen y empatía con la corriente clásica del liberalismo; *b)* por su herencia con el pensamiento ilustrado; *c)* por sus conceptos de tendencia universal y con tendencia a desvalorizar al sujeto femenino por el nada claro y abstracto concepto de individuo; *d)* por la inacabada condición de igualdad; y *e)* por emplear los medios institucionales para abatir la desigualdad entre mujeres y hombres (Pateman, 1996; Phillips, 1996; Lau, 2011).

A la teoría liberal, la crítica feminista le ha reclamado la miopía de la diferencia sexual en la categoría de individuo, pues éste, al ser puesto como una categoría abstracta y universal, desdibuja las diferencias existentes no sólo entre hombres y mujeres para acceder y ejercer sus derechos políticos, sino también, diluye las diferencias que pueden presentarse entre las mismas mujeres. La apuesta del feminismo consistió en reconfigurar la idea del individuo abstracto para incluir a las mujeres y concebir otra forma de política, no mejor o peor (en términos morales), pero sí más incluyente (Pateman, 1996; Phillips, 1996; Scott, 2012).

Sin embargo, de este desdeñado feminismo, extraigo la necesidad de pensar las formas y los mecanismos que el Estado debe implementar para garantizar la igualdad en acceso y ejercicio de los derechos político-electorales entre hombres y mujeres para constituirse como un Estado más democrático; a pesar de que el máximo ordenamiento jurídico reconoce la igualdad entre “el varón y la mujer” y el voto para las mujeres ya es una batalla ganada, existen nuevos retos por librar y derechos políticos por materializar, pues es evidente que el acceso a los derechos políticos se presentan de manera desigual entre mujeres y hombres inclusive, entre las mismas mujeres.

La democracia todavía tiene deudas pendientes con respecto de los derechos políticos de las mujeres, como lo señala Ana Lau Jaiven “seguimos reclamando el 'derecho a tener derechos’” (Lau, 2011: 53). El régimen democrático constitucional mexicano ha sido incapaz de garantizar los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, sin embargo, es importante señalar que además de los derechos políticos, también se les deben derechos civiles y sociales, la carencia de estos últimos engendra las desigualdades económicas que dificultan el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Con la llegada de la Edad Moderna y la creación de los Estados-Nación a través de la teoría contrafáctica⁵ del “contrato social”, éste fue (si se sigue su metáfora) discutido, pensado y firmado únicamente por los hombres, por lo que, como señala Pateman: la nueva sociedad civil fue creada a través de un contrato que intencionalmente excluyó a la mitad de la población y que por ello, posee la ambivalencia de otorgar libertad para los hombres y la sujeción para las mujeres (Pateman, 1995: 9-11). Esta libertad civil exclusiva de los hombres, garantizada mediante el contrato social, representa la expresión de un derecho patriarcal que sólo puede sostenerse en un contrato sexual previo y pone de manifiesto que el resurgimiento de la democracia sería inevitablemente y, en consecuencia, una forma de gobierno androcrática (Serret, 2012: 2).

Si las mujeres no firmaron el “contrato social”, serían objetos y no sujetos políticos, con ello arrastrarían sus efectos hasta llegar a las sociedades actuales más o menos democráticas que siguen sin garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para acceder y ejercer sus derechos políticos. La lucha de las sufragistas sólo fue el principio de una larga batalla por los derechos políticos negados a las mujeres en las sociedades democráticas, sin evadir los intereses de los Estados al garantizar el voto a las mujeres, este primer logro fue el medio para abrir la posibilidad formal de continuar con su conquista y su reclamo del cumplimiento de derechos políticos, sociales y civiles.

La perspectiva que tengo sobre la democracia, similar a la de Anne Phillips, es que ésta puede potenciarse en beneficio de las mujeres des-construyendo sus elementos inherentes del enfoque liberal (Phillips, 1996: 31). En consecuencia, la apuesta por la

⁵ Una teoría contrafáctica no hace referencia a la realidad política, sino a un modelo teórico abstracto. En este caso, el contractualismo parte del supuesto de pensar al Estado como si este hubiera tenido su origen en un contrato social. Véase: Luis Salazar (2007), “Bobbio y su revolución copernicana”, en *Política y Derecho. Repensar a Bobbio*, México: IIJ-UNAM.

democracia constitucional es una alternativa para que los derechos de las mujeres sean exigibles y garantizados.

Con base en lo anterior y de acuerdo a lo expuesto previamente, la democracia constitucional es un modelo de organización político y jurídico que busca, por un lado, limitar el poder político y, por el otro lado, distribuirlo entre las y los ciudadanos con la consideración de un marco a los derechos fundamentales que contemplan tanto derechos de libertad, derechos políticos y derechos sociales.

En este modelo destacan dos ideales: el primero de ellos busca establecer el contenido de las decisiones, es decir, qué asunto es legítimo o no decidir; y el segundo de ellos busca establecer las formas en que las decisiones son adoptadas, es decir, establecer quién y cómo está autorizado para adoptar decisiones legítimas (Salazar, 2013: 48). En definitiva, es posible sugerir que su primer ideal responde al componente del constitucionalismo, mientras que el segundo al de la democracia. En conjunto, la democracia constitucional puede definirse como: El régimen (o forma de gobierno) donde el ejercicio del poder de decisión colectiva se encuentra formal y materialmente limitado (Salazar, 2013: 48,53).

A partir de lo expuesto anteriormente, las medidas de paridad jurídico-electoral tienen una función dual: por un lado, como un mecanismo que emplea la democracia procedimental para garantizar el derecho político de las mujeres a ser votadas; y por el otro, en tanto derechos políticos, son al mismo tiempo un límite al poder político, mismo que se ha caracterizado por ser profundamente androcrático, de ahí que, en una especie de relación dialéctica, los derechos políticos de las mujeres deben potenciarse tanto procedimentalmente como constitucionalmente.

Una vez aclarado en qué consiste la democracia constitucional y su vínculo con la paridad electoral, procederé a mostrar los avances y desafíos que nos dejaron los resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

2.- Paridad en el Legislativo: El resultado de la lucha feminista.

Respecto al tema de paridad electoral, resulta prudente mencionar que es un nuevo punto de partida para continuar la exigencia de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en la garantía de sus derechos humanos, inherentes a una cultura democrática, pues su obligatoriedad constitucional es resultado de una larga lucha política de los movimientos

feministas en búsqueda de sus derechos políticos, cuyos antecedentes se ubican en las cuotas de género.

Desde 1996 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) estableció de forma indicativa la cuota de 30 % de candidaturas de un mismo sexo para la elección de diputados y senadores, misma que se convirtió en obligatoria y sancionable a partir de la reforma de 2002, no obstante, si la integración de las listas era resultado de elecciones primarias al interior de los partidos políticos, se exceptuaba la obligatoriedad de la cuota. Con la reforma de 2007-2008, el porcentaje de la cuota incrementó a 40 % y las listas de representación proporcional debían considerar la alternancia entre los géneros sin importar las suplencias, manteniendo la excepción de las elecciones primarias, dando paso a la intervención del TEPJF en una de las sentencias más trascendentales: la Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados,⁶ cuyos elementos fueron constitutivos de la reforma política electoral de 2014 (Cerva y Ansolabehere, 2011; Torres, 2012; Freidenberg y Alva, 2017).

Finalmente, a partir de la reforma político-electoral de 2014, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su Artículo 41 Constitucional, Fracción I que: “Los partidos políticos tienen como fin... garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales” (CPEUM, artículo 41, fracción I: 2014), este mandato constitucional se amplió en La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)⁷ y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).⁸

Como podemos apreciar, la paridad representó una modificación trascendental en la consolidación de la democracia en México respecto al ejercicio y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres, potenciando su participación y representación política. Su implementación provocó un impacto tanto en el sistema electoral como en el sistema político debido al cambio en el reparto del poder político. El resultado de las elecciones del 7 de junio

⁶ Entre los aspectos más relevantes de la sentencia destacan que: 1) los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo género, en el caso del principio de mayoría relativa; 2) las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto de manera alternada y; 3) de la totalidad de solicitudes de registro, por ambos principios tanto de diputados como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben integrar fórmulas completas, es decir, propietario y suplente de un mismo género. Véase: *Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados*. Disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-2011%20y%20acumulados.pdf> (20/01/2018).

⁷ Ver: Artículos 232-235 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

⁸ Véase: Art. 3 numerales 4 y 5; y Art. 25, numeral 1, inciso r de la Ley General de Partidos Políticos.

de 2015 y con la puesta en práctica de la paridad electoral, la LXIII Legislatura de la cámara de diputados quedó configurada con 287 hombres y 213 mujeres, que representan el 57.4 % y 42.6 % respectivamente.⁹ Con base en International IDEA 2015, señaló que de 54 países que en ese momento contaban con leyes de cuotas y/o paridad, México alcanzó el cuarto lugar antecedido por Ruanda (63.7 %), Bolivia (53.1 %) y Senegal (42.7 %) (Salazar y Osornio, 216: 2017).

Lo anterior muestra que es posible transformar la forma de concebir la representación política, incidiendo en la modificación de las estructuras de género¹⁰ en el espacio político, sin embargo, es necesaria una vigilancia constante en el cumplimiento de la norma, tanto en el sistema electoral, dependiendo del principio de elección: mayoría relativa y representación proporcional, así como en el sistema de partidos que se rehúsa a dejar atrás la persistente cultura política androcrática,¹¹ pues son justamente los partidos políticos los responsables del acceso a las candidaturas.

Como resultado de las elecciones de 2015, 2016 y 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 8 de noviembre de 2017 el Acuerdo INE/CG508/2017 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018” cuya finalidad, en materia de género consistió en establecer medidas para la transversalización real de la paridad de género durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, evitando las diversas prácticas implementadas por los partidos políticos en los procesos antes señalados para favorecer a los hombres sin vulnerar la ley.

En el referido acuerdo, del punto 11 al 17 correspondiente a los antecedentes, se considera un apartado denominado: “Paridad de género en candidaturas y acciones

⁹ Los datos de la LXIII Legislaturas corresponden al Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. Disponible en <http://siceef.ine.mx/diputadosps.html> (08/02/2018).

¹⁰ Siguiendo a Joan Scott entiendo por género una categoría de análisis constitutiva de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es al mismo tiempo, una forma primaria de relaciones significantes de poder. Véase: Joan Scott. 2013. “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*, México: UNAM-PUEG-Porrúa, pp. 265-302

¹¹ Utilizo el término androcrática(o) en el mismo sentido que Carol Pateman lo emplea para señalar que la política, como muchos otros espacios de la vida social, permanecen organizados, dominados y/o privilegiados por los hombres. Ver: Carole Pateman. 1996. *Críticas feministas a la dicotomía público/privado*, Barcelona: Paidós.

afirmativas para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores”. Dicho apartado está dedicado al contexto que justifica la necesidad de establecer medidas para cumplir con la paridad en el ámbito federal. En esta sección se considera: *a)* el marco jurídico de las leyes electorales vigentes; *b)* las Sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF: “Acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias”, “Paridad de género, dimensiones de su contenido en el orden municipal” y “Acciones afirmativas, elementos fundamentales” correspondientes a las sentencias 3/2015, 7/2015 y 11/2015, respectivamente; y *c)* la experiencia histórica del actuar de los partidos políticos al postular a las y los candidatos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional durante los procesos electorales previos y posterior a la reforma de 2014, que estableció como obligatoria la paridad.

Como resultado del análisis de los aspectos señalados y con la finalidad de impulsar medidas eficaces para la paridad, el acuerdo establece las siguientes medidas: Punto décimo sexto: Las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten para su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, deberán integrarse por personas del mismo género; punto décimo séptimo: La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros; punto décimo octavo: En las listas de representación proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. Para el caso de senadurías por el principio de representación proporcional, la lista deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres. Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género y; punto décimo noveno; Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es: *a)* La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la

segunda. b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres.¹²

Cabe señalar que el referido acuerdo también establece en el punto vigésimo tercero el procedimiento para que los partidos políticos o coaliciones rectifiquen las candidaturas cuando no cumplan con los requerimientos estipulados y al mismo tiempo señala que transcurrido el lapso de 48 horas a partir de que se solicite dicha rectificación, los partidos políticos serán sancionados o amonestados públicamente cuando no realicen las sustituciones correspondientes. Finalmente, en el punto vigésimo cuarto se establecen los criterios que tomará el Instituto cuando los partidos políticos incumplan con los criterios para garantizar la paridad tanto para el principio de mayoría relativa como para el de representación proporcional incluyendo la negativa del registro de candidaturas.

Como podemos observar, el Proceso Electoral 2017-2018, tanto en el ámbito federal como en el local fue trascendental en muchos sentidos y, la paridad electoral no fue la excepción. A continuación, presentaré la modificación porcentual de los últimos procesos electorales para evidenciar cómo las medidas adoptadas por el INE tuvieron resultados benéficos en la configuración de las cámaras de diputados y senadores en el ámbito federal.

Como se había mencionado anteriormente, en los procesos electorales posteriores a la reforma político electoral de 2014, se observó que los partidos políticos encontraron en la asignación de puestos de representación proporcional una alternativa para fingir posturas democráticas privilegiando esos espacios para los candidatos.

En lo que concierne a la integración de la LXII Legislatura (2012-2015), antes de la ley de paridad aprobada en 2014, la Cámara de Diputados inició su ejercicio constitucional con 315 hombres y 185 mujeres,¹³ que representaban el 63 % y 37 % respectivamente. Como resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 y con la puesta en práctica de la paridad

¹² Ver: Instituto Nacional Electoral, repositorio documental, Acuerdo INE/CG508/2017. <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94036/CGex201711-08-ap-1.pdf?sequence=6> (30/11/2017)

¹³ Véase: Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012. Capítulo 16. Resultados electorales y validez de las elecciones. Disponible en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/memoriasPEF2011-2012/23_Capitulo_16.pdf (20/08/2018).

electoral, la LXIII Legislatura de la Cámara quedó configurada con 287 hombres y 213 mujeres, que representan 57.4 % y 42.6 %.¹⁴

En términos reales aumentaron 28 mujeres. Al considerarse la asignación de curules (a partir de dos principios: el de mayoría relativa y el de representación proporcional), se observó que, en la LXII Legislatura 91 mujeres ganaron por el principio de mayoría relativa, mientras que en la LXIII Legislatura el dato ascendió a 118 por lo que las mujeres ganaron 27 distritos más. En contraste, los hombres pasaron de una legislatura a otra de 209 lugares a 182. Sin embargo, en dicha legislatura, es amplia la brecha existente entre 118 lugares que obtuvieron las mujeres y los 182 de los hombres por el mismo principio, dando un total de 64 lugares de diferencia.

En lo que respectivo al principio de representación proporcional, durante el proceso electoral federal 2014-2015, los partidos políticos presentaron sus listas de forma alternada entre un hombre y una mujer para cumplir con el principio de paridad establecido en la ley,¹⁵ sin embargo, esta medida no fue suficiente. En la LXII Legislatura, 94 mujeres ganaron por el principio de representación proporcional, mientras que, en la LXIII Legislatura, el dato aumentó a 95, esto se debe a que de las cinco listas (una para cada circunscripción) que entregó cada partido político,¹⁶ es decir: de un total de 50 listas, sólo seis iniciaban con el nombre de una mujer, por ende, el primer lugar que cada partido ganó por el principio de representación proporcional estuvo destinado en su mayoría para ser ocupado por un hombre.¹⁷

Con base en esta experiencia, y en las medidas adoptadas por el INE en cuanto a aplicar la paridad de una forma más amplia en las candidaturas para el principio de representación proporcional, la Cámara de Diputados quedará integrada por 241 mujeres y 259 hombres que representan el 48.2 % y el 51.8 % respectivamente. De esta cifra, de los 300 lugares que

¹⁴ Los datos de la LXII y la LXIII Legislaturas corresponden al Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. Disponible en <http://siceef.ine.mx/diputadosps.html> (08/04/2017).

¹⁵ La alternancia en las listas del principio de representación proporcional tiene su genealogía en la *Sentencia SUP JDC 12624/2011*, pero ahora son constitutivas y obligatorias de la LGIPE y de la LGPP.

¹⁶ Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Político MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista.

¹⁷ Véase: “Listado de Candidatos (Mayoría Relativa)”. Disponible en <http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/Listas> (03/07/2018).

corresponden al principio de mayoría relativa 141 fueron para mujeres y 159 para hombres. Comparativamente con la legislatura anterior, la brecha paso de 64 lugares a 18 lugares entre mujeres y hombres por ese principio, mismo que representa un avance sustancial.

Ahora bien, en lo que concierne a los 200 lugares del principio de representación proporcional, exactamente la mitad fueron para mujeres y la otra mitad para hombres, evidenciado que el acuerdo tomado por el INE, fue benéfico respecto a la forma de presentar y/o corregir las listas.

En lo referente a la Cámara de senadores vale la pena recordar que en este proceso electoral es la primera ocasión que la paridad incide en su configuración, dando los siguientes resultados. Por una parte, de los 96 lugares que corresponden al principio de mayoría relativa, 46 fueron para mujeres y 50 para hombres. Por otra parte, de los 32 lugares del principio de representación proporcional 17 fueron para mujeres y 15 para hombres. Sumando los datos anteriores, el Senado quedó integrado por 63 mujeres y 65 hombres que representan el 49.2 % y el 50.8 % respectivamente. Cabe señalar que la Legislatura anterior estaba integrada por un 67.2 % de hombres frente a un 32.8 % de mujeres.

Como podemos apreciar, los resultados en torno a la paridad son alentadores, pero no podemos perder de vista que estos resultados equivalen a más de 25 años de exigencia de derechos político-electorales en lo que a las acciones afirmativas refiere, pero más de un siglo de lucha política feminista, así como del trabajo institucional que ha adoptado las medidas necesarias para obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad.

En el marco de este trabajo institucional, es menester mencionar también la jurisprudencia 11/2018 denominada “Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres”, mismas que explícitamente señala:

la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una

participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto (TEPJF, Jurisprudencia 11/2018: 2018).

Como podemos apreciar, estos mecanismos han permitido mejorar los procedimientos democráticos asegurando condiciones igualitarias para el goce y disfrute de los derechos político-electoral de las mujeres y los hombres a partir del marco de derechos humanos contenido en su aspecto constitucional.

3. Desafíos de la paridad electoral.

Partiendo de los alentadores resultados numéricos, sin duda el primer desafío de la paridad consiste en conformar una bancada de mujeres feministas que impulsen una verdadera agenda de género más allá de su pertenencia partidista, para que, de esta forma, la llamada “masa crítica”¹⁸ se traduzca en leyes efectivas y eficaces para la vida de las mujeres. Para lograr este objetivo, es necesario que las mujeres diputadas y senadoras, puedan ejercer el poder político en iguales condiciones que los hombres.

Un segundo desafío es materializar la paridad electoral horizontal y vertical. En el espacio Local, vimos además la confrontación de dos derechos constitucionales y los argumentos vertidos a favor y en contra para privilegiar uno u otro, a saber, la disputa entre paridad electoral y reelección consecutiva, misma que no dejó otro camino que la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por medio de la Sala Superior o de sus Salas Regionales. Al respecto, existen dos importantes sentencias que tratan esta problemática: *SUP-JCR-4/2018 y acumulados* en el Estado de Baja California y *SUP-JDC-1172/2017 y acumulados* en el Estado de Chihuahua.

¹⁸ Drude Dahlerup explica que la masa crítica no refiere sólo al incremento cuantitativo de mujeres, sino que implica un cambio cualitativo en las relaciones de poder para que las mujeres puedan utilizar los recursos de la organización o de la institución para mejorar su propia situación y la del grupo al que pertenecen. Véase Drude Dahlerup, (1993). De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava, en *Debate feminista*, año 4, vol.8, septiembre, México.

Otro de los desafíos que está ligado a la paridad electoral, es sin duda, la violencia política contra las mujeres, misma que tiene sus propios retos en cuanto a ser tipificada y sancionada, pero lo cierto es que la obligatoriedad de que haya mujeres candidatas a partir de la paridad ha hecho más visible esta problemática y la urgencia de tomar medidas sancionables al respecto.

El Proceso Electoral 2017-2018, está por concluir. La asignación definitiva de lugares a puestos de elección popular se encuentra en su etapa final y en este primer bosquejo, es posible reafirmar que la paridad electoral es nuevo punto de partida que requiere el trabajo conjunto del feminismo, de la academia, de las instituciones y de aliados estratégicos que se sumen a la defensa de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad.

De la mano de las reformas constitucionales, los derechos políticos de las mujeres han sido defendidos por medio de las sentencias emitidas por el TEPJF. La experiencia histórica nos ha demostrado que en muchas ocasiones los partidos políticos y la sociedad en general, se han visto obligados a respetar los derechos políticos de las mujeres a “golpe de sentencia”, convirtiendo este mecanismo en una estrategia de lucha actual pero también en un antecedente y parámetro a considerar con miras a una reforma electoral. Desde luego, mi realismo político como politóloga feminista me impide sugerir respuestas mágicas para superar la frágil, y siempre endeble democracia existente, por el contrario, mi intención radica en hacer una crítica a la existente democracia constitucional, confiando en su posible perfectibilidad en beneficio de la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos.

Conclusiones

El modelo de democracia constitucional planteado en esta investigación muestra que los derechos fundamentales constituyen la base de dicho modelo y representan, al mismo tiempo, los límites del poder político. Por ello, vale la pena reiterar que el objetivo de las acciones afirmativas cuyas características consisten en que deben ser temporales, razonables, proporcionales y objetivas, radica en revertir la desigualdad histórica y de facto que han enfrentado las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Desafortunadamente, aunque hoy es una obligación constitucional serán necesarios mecanismos que vigilen constantemente el actuar de los partidos políticos y sus recurrentes simulaciones para cumplir la ley evitando potenciar el acceso real de las mujeres al poder político.

El acuerdo del INE INE/CG508/2017, la jurisprudencia 11/2018, así como las diversas sentencias que emita el TEPJF, dan muestra de esta necesaria vigilancia, pues hasta que la cultura androcrática que impera en los partidos políticos tienda hacia la democracia será posible avanzar a una verdadera igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Desde 2014 hasta la fecha, la paridad electoral no tiene una conclusión definitiva, ha cumplido sus objetivos incrementando la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados, pero como se advirtió al principio de esta investigación, ha sido un nuevo punto de partida para transformar por completo los parámetros de representación política y exigir la materialización de un derecho constitucional que nos lleve a concebir a las mujeres como sujetos autónomos en la búsqueda y ejercicio del poder político.

El escenario que dejó el Proceso Electoral 2017-2018, en el ámbito federal y local, dan cuenta de que existen muchos desafíos en los cuales es necesario trabajar, reglamentar y, en su caso, tipificar y sancionar. Además del esfuerzo conjunto que nos llevó a resultados históricos en la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario reconocer que el movimiento feminista mexicano es el inminente responsable de los derechos que las mujeres del siglo XXI podemos disfrutar.

Con base en lo analizado en esta investigación, me quedo con dos mensajes claros y contundentes que ya se han señalado en las diversas sentencias del TEPJF, a saber, “Las acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias” y “Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres”

En estos claroscuros de lo que se ha ganado y lo que falta por conseguir tanto constitucionalmente como culturalmente, es insostenible la exclusión de las mujeres, resulta urgente “abrogar” los prejuicios y prácticas que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y continuar transgrediendo y modificando los mandatos de género en el espacio del poder político que se rehúsa a dejar de ser androcrático.

Cada paso que los derechos políticos de las mujeres conquistan, presenta nuevos desafíos: en las instituciones electorales, en los partidos políticos, en el Estado y en la sociedad. La paridad es necesaria para alcanzar la igualdad política entre hombres y mujeres en el menor tiempo posible, sin embargo, su vigencia es correlativa al fortalecimiento democrático del sistema político mexicano.

Son muchos los pendientes con la ciudadanía de las mujeres, sin embargo, mientras exista un desfase entre los avances jurídicos y la cultura política, será necesario trabajar constantemente en la dimensión cultural para transitar a una democracia feminista, pues siguiendo la lectura de Alicia Miyares, las democracias actuales deben incluir al feminismo ya que, en tanto teoría política, es la única capaz de conciliar la necesidad de la libertad individual con la exigencia de una igualdad distributiva y de reconocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón, Víctor y Esperanza Palma (coords.). 2014. *Instituciones, participación y Representación políticas en México*, México: UAMI-Tirant lo Blanch.
- Bovero, Michelangelo. 2013. *La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía* (Lorenzo Córdova Vianello y Paula Sofía Vásquez Sánchez, Trads.), México: TEPJF.
- y Luigi Ferrajoli. 2015. *Teoría de la Democracia. Dos perspectivas comparadas*, Colección Temas de la democracia, Serie Conferencias Magistrales 13, México: INE.
- Cerva, Daniela y Karina Ansolabehere (dir.). 2011. *Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales en México*, México: TEPJF-UNAM.
- Cejas, Mónica y Ana Lau Jaiven (coords.). 2011. *En la encrucijada de género y ciudadanía: sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción política*, México: Itaca.
- Dahlerup, Drude. 1993. “De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava”, *Debate Feminista*, año 4, vol.8, septiembre, México, pp.165-206
- Escamilla, Alberto y Miguel González (coords.). 2015. *El nuevo sistema político electoral mexicano en 2015*, México: UAMI.
- Freidenberg, Flavia y Raymundo Alva. 2017. “¡Las reglas importan! Impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel” en Flavia Freidenberg (editora), *La representación política de las mujeres en México*, México: INE-UNAM-III, pp. 1-43.
- Miyares, Alicia (2003), *Democracia Feminista*, Madrid: Cátedra.
- Pateman, Carole. 1995. *El contrato sexual* (María Luisa Femenías, Trad.), Barcelona: Anthropos-UAMI.
- Pateman, Carole. 1996. *Críticas feministas a la dicotomía público/privado*, Barcelona: Paidós.
- Phillips, Anne. 1996. *Género y teoría democrática* (Isabel Vericat, Trad.), México: UNAM-IIS-PUEG.
- Salazar, Luis. 2007. “Bobbio y su revolución copernicana”, en *Política y Derecho. Repensar a Bobbio*, México: III-UNAM.

- , Luis. 2010. *Para pensar la democracia*, México: Fontamara.
- Salazar, Pedro. 2013. *La democracia Constitucional. Una radiografía teórica* (3ª. reimpr.), México: FCE-IIIJ-UNAM.
- Salazar, Rodrigo y María Cristina Osornio. 2017. “Representación paritaria, democracia interna y reelección ¿Se puede tener igualdad sin rendición de cuentas?” en Flavia Freidenberg (editora), *La representación política de las mujeres en México*, México: INE-UNAM-IIIJ, pp. 217-241.
- Sazbón, José. 2007. *Cuatro mujeres en la Revolución Francesa*, Buenos Aires: Biblos.
- Scott, Joan. 2012. “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en *El género la construcción cultural de la diferencia sexual*, Marta Lamas (comp.), 4ª Reimpresión, México: UNAM-IIS-PUEG-Porrúa, pp. 265-302.
- , Joan. 2012. *Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés* (2ª. ed.) (Guillermina Cuevas Mesa, trad.), México: FCE.
- Serret, Estela (coord.). 2012. *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, México: SCJN-Fontamara.
- Torres Falcón, Marta. 2012. “El principio de igualdad y las acciones afirmativas. Un análisis desde los derechos humanos”, en Estela Serret (coord.), *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, México: SCJN-Fontamara, pp. 93-120.
- Wollstonecraft, Mary. 2013. *Vindicación de los derechos de la mujer* (Marta Lois González, Trad.), México: Taurus.

Legislación

- Cofipe. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible: en http://normateca.ife.org.mx/normanet/files_otros/COFIPE/cofipe.pdf (02/03/2018).
- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014). Tomo I. México: INE/FEPADE/UNAM/IIIJ-UNAM/TEPJF.
- Compendio de Legislación Nacional Electoral (2014). Tomo II. México: INE/FEPADE/UNAM/IIIJ-UNAM/TEPJF.

Sentencias

Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados, disponible en:
<http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-2011%20y%20acumulados.pdf> (20/01/2018).

Sentencia SUP-JCR-4/2018 y acumulados, disponible en:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0004-2018.pdf (05/03/2018).

Sentencia SUP-JDC-1172/2017 y acumulados, disponible en
<http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SUP-JDC-1172-2017.pdf>
(15/02/2018).

Páginas Web

Instituto Nacional Electoral, Listado de Candidatos (Mayoría Relativa). Disponible en
<http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampañas/Candidatos/Listas> (03/07/2018).

Instituto Nacional Electoral, Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012. Capítulo 16. Resultados electorales y validez de las elecciones, disponible en
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/memoriasPEF2011-2012/23_Capitulo_16.pdf
(20/08/2018).

Instituto Nacional Electoral, repositorio documental, Acuerdo INE/CG508/2017, disponible en:
<http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94036/CGex201711-08-ap-1.pdf?sequence=6> (30/11/2017).

Instituto Nacional Electoral. Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales, disponible en: <http://siceef.ine.mx/diputadosps.html> (08/02/2018).